

es

Escuela Social de Tudela y la Ribera

CURSO 2012 – 2013

POR OTRO ABORDAJE DE LA CRISIS: HACIA UNA SOCIEDAD NUEVA

7

| ABRIL/ 2013 | TEMA | PONENTE |
|----------------------------|---|---|
| Martes 16: Ponencia | ¿Economía o cultura? En el contexto de la crisis actual ¿dónde buscar las claves últimas inspiradoras y motrices para un futuro nuevo? | Manuel Campillo <i>Catedrático de Filosofía.</i> <i>Concejal del PSN en el M.I.</i> <i>Ayuntamiento de Tudela</i> |

ORGANIZA

Fundación Acción Solidaria
www.fundaciónacciónsolidaria.es
Palacio Decanal – Plaza San Jaime, 2
31500 – Tudela

De 8,00 a 9,30 de la tarde

Democracia de calidad frente a la crisis

Por Victoria Camps / Adela Cortina / José Luis García Delgado

Un gran número de españoles está viviendo la crisis actual como un auténtico fracaso del país en su conjunto. Hace ya más de tres décadas emprendimos una transición política y social que, con sus luces y sombras, como todo en este mundo, se ha convertido en una auténtica referencia para algunos países deseosos de dar el paso de la dictadura a la democracia. El poder político pasó paulatinamente de un partido de centro a partidos de centro-izquierda y centro-derecha, sin más ruido de sables que el del 23-F y sin más mecanismo que el de instituciones políticas y elecciones libres y bien reguladas. Se transformaron las infraestructuras, se modernizaron los medios de comunicación, aumentó el número de estudiantes universitarios, ingresamos en la Unión Europea, construimos un razonable Estado de justicia, creímos haber alcanzado la velocidad de crucero propia de países democráticos, no solo en política y economía, sino también, y sobre todo, en cultura. La disposición al diálogo, el espíritu abierto y tolerante parecían haber sustituido los viejos estilos de vida en una sociedad pluralista.

Pero en 2007 estalló en el nivel global y local esa crisis que había venido gestándose, una crisis que parece ser sobre todo económico-financiera y política, y descubrimos que el rey estaba en buena parte desnudo. Que, por desgracia, nos queda mucho camino por andar.

Para recorrer con bien ese camino importa preguntar qué nos ha pasado, qué ha fallado, y un punto esencial es que no se trata solo de una crisis económica y política, **sino también de una crisis ética**, que pone de manifiesto las carencias de espíritu cívico. **En los últimos años, nos ha faltado un marco ético efectivo, capaz de estimular la responsabilidad social y un buen uso de la libertad.**

Con el deseo de aportar algunas sugerencias para la elaboración de ese marco, el Círculo Cívico de Opinión dedica el sexto de los Documentos que ha publicado al tema *Democracia de calidad: valores cívicos frente a la crisis*, y en él apunta a modo de ejemplo medidas como las siguientes:

Perseguir un bien común. En una democracia que es, a su vez, un Estado de derecho, es preciso perseguir un bien común que amplíe el horizonte de los intereses individuales como los únicos fines de la actividad económica y política. Por legítimos que sean los intereses privados, las instituciones y los ciudadanos se deben también a unos intereses comunes.

La equidad como fin. Sostener la equidad y mejorarla debería ser el principio irrenunciable de un Estado de derecho. En muy poco tiempo, España consiguió poner en pie un Estado de bienestar homologable con el resto de los países de nuestro entorno. Pero el modelo es frágil y no podrá sostenerse si no va acompañado de la voluntad de preservarlo por encima de todo. Hay que repensar el modelo con serenidad y con voluntad de conseguir acuerdos lo más amplios posibles.

Debe cambiar el orden de los valores. Los años de bonanza económica pasados han propiciado una cultura de la irresponsabilidad y del dinero fácil, que ha traído consigo corrupción, evasión de impuestos y un consumismo voraz. Si algo puede enseñar la crisis es que debe cambiar la jerarquía de valores transformando las formas de vida, entendiendo que el bienestar no se nutre solo de bienes materiales y consumibles. Formas de vida que fortalezcan cultural y espiritualmente al individuo y a la sociedad con valores como la solidaridad, la cooperación, la pasión por el saber, el autodomínio, la austeridad, la previsión o el trabajo bien hecho.

Decir la verdad. La costumbre de ocultar la verdad por parte de políticos y controladores de la economía de distintos niveles ha sido responsable de la crisis en buena medida. Pero esa costumbre se ha extendido también entre intelectuales y otros agentes de la vida pública, plegados a lo políticamente correcto, sea de un signo o de otro. Entre la incompetencia y la ocultación saber qué pasa y anticipar con probabilidad qué puede pasar es imposible para la gente de a pie.

Cultura de la ejemplaridad. Los protagonistas visibles de la vida pública tienen un deber de ejemplaridad, coherente con los valores que dan sentido a las sociedades democráticas. La corrupción, la malversación de bienes públicos, el despilfarro, el desinterés por el sufrimiento de quienes padecen las consecuencias de la crisis, la asignación de sueldos, indemnizaciones y retiros desmesurados producen indignación en ocasiones, pero también modelos que se van copiando con resultados desastrosos.

Rechazar lo inadmisibile. Para que una sociedad funcione bien es necesario que las leyes sean claras y que se apliquen, pero también que la ciudadanía rechace las conductas inaceptables. Es verdad que hay que ir con mucho cuidado con eso que se ha llamado la “**vergüenza social**” y que es una de las formas que tiene una sociedad para desactivar actuaciones que considera reprobables. Esa vergüenza ha causado tanto daño y es tan manipulable, la utilizan tan a menudo unos grupos para desacreditar a otros, que solo puede recurrirse a ella como una cultura, vivida por todos los grupos sociales, de que determinadas conductas no pueden darse por buenas.

Potenciar el esfuerzo. Lo que vale cuesta. Dar a entender que se pueden alcanzar las metas vitales sin trabajo alguno es engañar, condenar a las gentes a ser carne de fracaso y destruir un país. Aprender, por el contrario, que esfuerzo y ocio son dos caras del buen vivir, que ayudan a construir un buen presente y un buen futuro.

Superar la partidización de la vida pública. La partidización de la vida pública es uno de los lastres de nuestra política, que impide agregar voluntades para encontrar salidas efectivas y consensuadas a los problemas que nos agobian. Cuando ante cada uno de los problemas públicos la sociedad se divide siguiendo los argumentarios de los partidos políticos se destruyen la cohesión social y la amistad cívica indispensables para llevar una sociedad adelante.

El sentido de la profesionalidad. La profesionalidad, en todos sus ámbitos de ejercicio, es un valor que no debe medirse solo por la eficiencia y la competencia científica y técnica, siendo ambos valores altamente encomiables. Ser un buen profesional significa incorporar también ideales que hagan de las distintas profesiones un servicio a la sociedad y al interés común. Es buena la gestión estimulada no solo por la obtención de beneficios materiales, sino por un espíritu cívico y de servicio.

Promover la educación. El mejor instrumento de que disponemos para conseguir una sociedad mejor y cambiar el orden de los valores es la educación, entendida como formación de la personalidad y como una tarea de la sociedad en su conjunto. El ideal de autenticidad debe poder conjugarse con los valores propios de la vida democrática.

Recuperar el prestigio. Ni las instituciones ni las personas que ostentan los cargos de mayor responsabilidad han sabido ganarse la reputación y el prestigio imprescindibles para merecer confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía. Además del déficit notable de ideas para gestionar y resolver la crisis, se echa de menos un liderazgo compartido por el conjunto de grupos políticos, que actúe con valentía y con prudencia, que corrija los despilfarros de otros tiempos, que sepa discernir la gravedad de cada problema y que tenga visión de futuro y no atienda únicamente al corto plazo.

Construir un marco de valores comunes. Es urgente construir un suelo de valores compartidos, fortalecer los recursos morales que surgen de las buenas prácticas porque solo así se generará confianza. Pero también crear espacios de deliberación que hagan posible construir pueblo, y no masa, que fortalezcan la intersubjetividad y no se disgreguen en la suma de subjetividades. Generar pueblo y sociedad civil tanto en España como en Europa, donde somos y donde queremos estar, es uno de los retos, porque tal vez sea esta una de las claves del fracaso de Europa: no haber intentado reforzar la conciencia de ciudadanía europea, la Europa de los ciudadanos, esa pieza que resulta indispensable para que sean posibles tanto la Europa económica como la política.

Victoria Camps, Adela Cortina y José Luis García Delgado, en representación del Círculo Cívico de Opinión.

¿Súbditos o ciudadanos?

En una democracia madura no basta con exigir responsabilidades, hace falta también que nos hagamos cargo de cuanto esté en nuestras manos.

Por Fernando Vallespín

Por valernos de una metáfora de T. Hobbes referida a la Revolución Inglesa, si los tiempos se midieran por su intensidad en términos de altura o bajura, hoy estaríamos en España en “el más alto de todos los tiempos” desde la Transición. **Pocas veces nos hemos enfrentado a una coyuntura tan difícil y, lo que es peor, con tan pocos recursos para superarla.** La sociedad española aborda la salida a la crisis en una clara situación de dependencia respecto a Europa, con soberanía demediada, profundamente fragmentada en su dimensión territorial, alienada respecto a su clase dirigente, y con una población desilusionada al borde de la depresión colectiva. Variables todas que, al final, es posible que sean casi más sustanciales que los propios recursos económicos.

Por todo ello es muy importante que no nos equivoquemos a la hora de formular el diagnóstico sobre cómo hemos llegado hasta aquí y sepamos ponderar con mesura la atribución de responsabilidades. Es bien sabido que hoy la sensación dominante es que la clase política ha sido la causa principal de todos nuestros males. Por muchas razones, muchas de ellas fundamentadas. Pero a este sentimiento le faltaba un relato, una narrativa en la que encajara nuestra sensación de haber sido engañados por los políticos y otras élites “extractivas”. De ahí el éxito del estupendo artículo de César Molinas publicado en estas páginas. Con independencia de su conclusión, que es discutible, es la historia que ansiábamos escuchar porque en gran medida contribuye a aliviar la sensación general de impotencia ofreciéndonos un chivo expiatorio perfecto. Y no cabe duda de que lo consiguió con gran eficacia. Ya podemos dormir tranquilos, estamos donde estamos por culpa de los políticos y otros grupos codiciosos. Ya tenemos al culpable. Descansen.

La cuestión que permanece abierta y sobre la que me gustaría llamar la atención es que **esa maldita clase política parece que nos había sido impuesta, como si nosotros no la hubiéramos votado, halagado y facilitado en su afán depredador. Como si no hubiéramos sido cómplices.** Sí, ya sé que esto no me va a hacer muy popular, pero lo reitero. Nos comportamos como si hubiéramos sido sus rehenes menores de edad a quienes ella manipuló como a niños, **como si fuéramos súbditos en vez de ciudadanos.**

¿Acaso no se eligió a destajo a candidatos imputados de corrupción? ¿Es que no prevaleció el sectarismo sobre la ética pública? ¿Qué atención merecieron las múltiples denuncias de cuanto iba pasando, porque haberlas las hubo a mares? ¿No demandábamos todos, por ejemplo, que el AVE pasara por nuestra capital de provincia? ¿Alguien se preguntó alguna vez de dónde salía el dinero para tanta obra faraónica? Siempre con las excepciones de rigor, claro.

No, no fuimos una sociedad vigilante. Fuimos ciudadanos distraídos, autosatisfechos y sectarios, poco proclives a que nos estropeará la fiesta la atención a nuestra dimensión ciudadana. Mientras los políticos nos ofrecían prebendas aquí no chistaba nadie. Ahora que nos las quitan son todos unos depravados. Nunca nos gustaron, es verdad, porque somos una sociedad apolítica, es la cultura política que heredamos del franquismo.

La Encuesta Social Europea refleja que España, junto con Portugal, es el país donde menos interesa la política, solo muestra algún interés en torno a un 30% de la población, algo que ratifica el CIS. Y en las muestras de compromiso político solo puntuamos alto en la variable de las manifestaciones. O sea, que somos ciudadanos reactivos, que se movilizan puntualmente cuando se les toca algún interés específico, pero que luego se desconectan con la misma facilidad con la que se ven impelidos a salir a la calle.

El cambio de perspectiva comenzó poco antes de que se hiciera visible el Movimiento 15-M, **que pareció significar un renacimiento de nuestra ansia por sentirnos ciudadanos activos**. Incluso con el sorprendente efecto, detectado en las encuestas, de propiciar un acuerdo mayoritario en la población sobre su enjuiciamiento de la política. Pero casi inmediatamente votamos como siempre y a los de siempre. Ligerísima subida del voto en blanco y nulo. Eso es todo. Fantástica contradicción. Y hay que agradecerles a quienes entonces se movilizaron que al menos supieran sacarla a la luz.

¿Por qué no construir un relato también sobre nuestra incompetencia ciudadana, sobre nuestra facilidad para no asumir las responsabilidades propias? No sigamos haciéndonos trampas en el solitario. En una democracia madura no basta con exigir responsabilidades, hace falta también que nos hagamos cargo de cuanto esté en nuestras manos. **Es posible que haya llegado el momento de abandonar nuestra condición de súbditos cabreados y convertirnos al fin en ciudadanos críticos y constructivos.**

Una reforma ideológica

El Gobierno del PP considera el sistema educativo un foco de adoctrinamiento

- **Educación limita los contenidos que regulan las comunidades autónomas**
- **La norma prevé “traslados forzosos” de docentes**

Por Francisco Imbernón

El Gobierno presenta su reforma educativa en la línea de las propuestas que lanzó antes de verano. Aunque abrió una consulta en la web, no ha habido el debate que nos urgía, y en las conclusiones es fácil ver cómo el ministerio lleva el agua a su molino. **En los últimos 30 años España ha tenido tres grandes reformas (LOGSE, LOCE y LOE), y cinco en 50 años.** Mientras, los países referencia por sus resultados académicos han mantenido sus grandes leyes, y se han limitado a reformas parciales. Si en España fuésemos capaces de consensuar una ley no necesitaríamos estos golpes de timón con cada Gobierno.

La educación se asimila a ideología y las políticas educativas son políticas ideológicas, no solo en los grandes temas (religión contra ciudadanía...), sino en el currículum oculto (el determinismo social, el autoritarismo, la selección...). En realidad, más que reformas educativas son contrarreformas, hay que eliminar la herencia recibida, no importa que haya sido un intento de innovación, y además se hace sin probar su invalidez. En el sector eso genera desconcierto, desilusión, resignación y grandes acopios de paciencia.

Esta reforma responde a un modelo ideológico: recentralización, aceptar la educación diferenciada (para poder subvencionar a sus grupos de presión), eliminación de la educación de la ciudadanía y sustitución por una asignatura más afin a su ideología, la evaluación como medición, la desconfianza en el profesorado, una menor participación de los padres y madres, segregación temprana en la ESO, eliminación progresiva de la comprensividad, movilidad forzosa del profesorado (con lo que cuesta cohesionar un equipo docente)...

Este modelo defiende que el fracaso escolar se elimina con mano dura, considera la evaluación un instrumento de selección y no de mejora, quiere crear ciudadanos disciplinados que salgan bien en la foto PISA, persigue la empleabilidad y no se hace garante de una cultura y una educación para todos. Y todo ello se argumenta pero no se prueba, basta con pregonarlo.

Al Gobierno de Aznar se le quedó en el tintero y este no ha tardado en presentar su proyecto, pues considera el sistema educativo un foco de adoctrinamiento. Sin consenso ni debate, con una consulta mínima, lo peor del anteproyecto es que no construye la escuela del futuro, sino que recupera la mala escuela del pasado con alguna nueva idea interesante. A un Gobierno se le pide que anticipe el futuro. Este no es el caso, por supuesto.

Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.

Hacia un nuevo modelo de Universidad pública

Por Ana Ripoll

Si la Universidad española quiere destacar en el ámbito internacional necesita mejorar, algo que, sin duda, viene haciendo en los últimos años. Sin embargo, si quiere seguir avanzando en el camino de la excelencia, debe hacerlo de forma más veloz e intensa que el resto de universidades del mundo. Las restricciones en la financiación universitaria, derivadas de la actual crisis económica, representan una seria amenaza en este proceso de construcción de una Universidad pública innovadora y competitiva capaz de atraer a los mejores estudiantes e investigadores.

La actual estructura universitaria no dispone de instrumentos, ni de herramientas, para abordar la clara regresión que sufren los presupuestos y se presupone que la reducción de la oferta, la calidad y la investigación es el mecanismo para ajustarse al gasto previsto. No existen muchas alternativas: o bien se aceptan los recortes restando potencialidad a nuestros campus o bien se acepta ir incrementando los déficits presupuestarios.

Debemos aprovechar la crisis para dar un salto cualitativo hacia la excelencia

Ante estas circunstancias, las universidades deben apelar a sus valores y utilizar sus fortalezas para dar un salto cualitativo, explorando la posibilidad de articular una alternativa innovadora, viable y sostenible inspirada en los elementos distintivos de las mejores universidades europeas. Es necesario construir un nuevo modelo de Universidad que permita resolver la difícil situación actual, pero también paliar los problemas y deficiencias estructurales que la Universidad española arrastra (gobernanza, financiación, rendición de cuentas a la sociedad, endogamia, dominio de lenguas, baja remuneración del profesorado...).

Si se quieren construir universidades intensivas en investigación, capaces de competir con fuerza en los rankings internacionales, es necesario ser más selectivos en la oferta de estudios y vincular la docencia a la investigación. Es preciso primar los grupos de máxima excelencia e iniciar políticas activas de captación de investigadores excelentes. Es imprescindible redimensionar las universidades, equilibrando el número de estudiantes de grado, potenciando posgrados oficiales impartidos mayoritariamente en inglés.

Avanzar hacia un nuevo modelo también conlleva universidades con un sistema propio, no burocratizado, de captación, selección y promoción del profesorado, acorde con las necesidades docentes y de investigación estratégica; un sistema que permita ganar adaptabilidad, mediante contrataciones y retribuciones más flexibles y adaptadas a los resultados académicos. De igual modo, construir alternativas al sistema universitario actual significa diseñar procesos de selección de los estudiantes mediante procedimientos rigurosos, transparentes, justos y equitativos, fijando ayudas a los estudios de acuerdo a la especificidad de la titulación, el currículo académico y la capacidad económica familiar.

El perfil generalista de la mayor parte de las universidades ha consolidado en las mismas el desarrollo de centros muy heterogéneos y con perfiles marcadamente diferenciados. Para huir de la mediocridad que ello puede comportar, es preciso aceptar dicha diversidad, reconocer las singularidades y apostar por estructuras descentralizadas en las que cada centro llegue a ser motor y protagonista de su actividad académica.

Algo que requiere, por un lado, una estructura corporativa menos numerosa en los rectorados y mucho más centrada en la elaboración y ejecución de planes estratégicos y, por otro lado, una estructura fuertemente operativa en los centros capaz de desarrollar sus objetivos estratégicos. Es pues necesario dar una mayor responsabilidad de gestión a los centros de acuerdo con sus objetivos, tal vez mediante contratos-programa internos.

Las reformas institucionales de los sistemas universitarios europeos tienen el denominador común de facilitar el encaje entre autonomía y responsabilidad. **Ganar autonomía académica sin disponer de mayor autonomía financiera puede llevar al colapso de las universidades.** Resulta vital un cambio en el modelo de financiación universitaria que garantice la suficiencia y que no se centre en variables fundamentalmente docentes. Un modelo que reconozca un perfil de universidad intensiva en investigación más centrado en los resultados, que estimule y no castigue la búsqueda de caminos nuevos para la excelencia. Mantener y preservar el carácter de servicio público de las universidades está fuera de duda, pero, a su vez, es trascendental una acción proactiva de las universidades en la búsqueda de fondos privados, que les permita ganar autonomía financiera e incorporar estabilidad en su financiación.

Una reforma en la línea comentada requeriría un cambio en el marco normativo y en la legislación vigente. Sin ello será difícil que las universidades puedan explorar nuevas vías de gobernanza. Sin dejar de analizar y pensar, es necesario comenzar a actuar pudiendo ser de interés el iniciar algún proyecto piloto de gestión diferenciada. Un proyecto en el que una universidad pusiera en práctica estrategias de gestión económica y políticas innovadoras para ir avanzando hacia un nuevo modelo sostenible de universidad pública.

Estas son algunas de las ideas que expongo en un trabajo que se puede consultar al completo en la *web* www.amicsuab.cat y que pueden permitir que las universidades sean responsables de sus éxitos y fracasos y puedan ofrecer un mejor servicio a la sociedad.

Ana Ripoll ha sido rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Todo el poder para la ciencia

No es razonable que en un país que debería salir de la crisis con un modelo económico y social distinto se marginen aquellas actividades, como las científicas, que están en la base de nuestras opciones de futuro

Por Pere Puigdomènech

En el barómetro de Demoscopia sobre confianza institucional publicado recientemente aparece una vez más que los colectivos que merecen más confianza a los ciudadanos españoles son los científicos, esta vez seguidos de los médicos. En cambio, las profesiones que menos confianza producen son bancos, partidos políticos y los políticos. Parece un mundo al revés. En una sociedad democrática los ciudadanos otorgan a un colectivo la confianza para que gobierne, pero finalmente resulta ser este en el que menos confían. En cambio, en estos momentos aquellos en quien más confían tienen problemas para llevar a cabo su trabajo e incluso para sobrevivir. **¿Deberíamos dar la vuelta al sistema y proponer que sean aquellos en quienes más confían los ciudadanos, científicos y médicos, los que gobiernen?**

Algo así proponía Platón en su diálogo *La República*. En esta obra célebre proponía que una aristocracia del saber fuera la que tomara las riendas del Gobierno. Este concepto ha ido rondando por las ideas políticas durante siglos y ha servido principalmente para justificar Gobiernos totalitarios. La historia nos enseña que no hay alternativa sensata a los sistemas democráticos aunque parecería apropiado hacer reformas para que la confianza del ciudadano en el sistema político se recupere. **Es cierto que la presencia de científicos o médicos en los Gobiernos no es frecuente, pero tampoco extraña.** Por ejemplo, el primer Gobierno socialista en 1982 tuvo una buena representación de miembros con formación científica y no deja de ser uno de los mejor recordados de los últimos años. El actual Gobierno solo tiene un miembro con formación médica y justamente en una función no relacionada con ello.

La relación entre ciencia y Gobierno se da en las dos direcciones posibles. Por una parte los Gobiernos se enfrentan cada vez más a cuestiones en las que deberían tener en cuenta los datos que proporciona la ciencia. Cuando hablamos de energía, de salud, de medio ambiente o de agricultura, por poner unos ejemplos, **los Gobiernos necesitarían disponer de los mejores datos posibles sobre estas cuestiones, elaborados de forma transparente e independiente y para ello deberían contar con el consejo de los científicos.** Es posible que sea este punto uno de los aspectos que los ciudadanos valoran de científicos y médicos. Si estos hacen bien su trabajo, los resultados deberían estar producidos con objetividad y estar dirigidos a ayudar a que la sociedad tome sus decisiones de la mejor manera posible. Distinguir entre quienes asesoran y quienes deciden es esencial en una sociedad democrática, pero que de forma transparente las decisiones se tomen tras valorar los mejores datos científicos disponibles parece imprescindible. **Los Gobiernos de los países más avanzados suelen tener instancias para consultar a la hora de tomar decisiones, algo prácticamente desconocido en España.**

Por otra parte la ciencia (como la sanidad o la educación) necesita del Gobierno. **Es absolutamente ilusorio pensar que la iniciativa privada va a financiar la investigación científica en su totalidad.** En parte pueden hacerlo fundaciones privadas, y en este sentido el mecenazgo es importante. Pero en todos los países avanzados está claro que hay una división del trabajo entre la financiación de la investigación de iniciativa autónoma de la que salen las ideas nuevas, y la financiación de la investigación dirigida a resolver cuestiones concretas de interés para la sociedad y la industria que tiene que estar basada en la financiación privada. La investigación creativa, en todos los países del mundo, es una competencia del Estado que tiene que velar, desde luego, para que sea de la mejor calidad posible. Y es en este punto en el que la realidad actual muestra su aspecto más descorazonador.

Curiosamente, entre las profesiones más afectadas por la crisis están aquellas en las que más confían los ciudadanos, que son científicos y médicos, a las que se añaden las pequeñas y medianas empresas, profesores de la enseñanza pública y las ONG. El año 2012 se termina con el anuncio de que la convocatoria para proyectos de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad se retrasa unos meses. Y 2013 comienza con que uno de los fondos financiadores de proyectos, los de investigación agrícola, que ya estaban aprobados no se van a financiar. Esto se añade a recortes en sueldos, en contratos temporales y en plazas de investigador y profesor, en un entorno en el que el sistema no se reforma para hacerlo más eficiente. La situación presente va a ser demostrativa de las contradicciones en las que nos encontramos. Va a haber millares de funcionarios a los que ni se les permite competir para conseguir medios para llevar a cabo su trabajo. Y como efecto colateral de consecuencias letales para el futuro, muchos investigadores jóvenes que dependen de contratos financiados por proyectos se van a ver incapacitados para continuar su trabajo.

Profesiones como las de científico o médico o profesor de la enseñanza pública no tienen sentido sin profesionales motivados por su trabajo y entregados a él. **Las pequeñas y medianas empresas necesitan de emprendedores con ilusión. Y esta se puede estar perdiendo entre recortes y privatizaciones.** Nadie duda de que haya que hacer todo lo posible para gestionar eficientemente los recursos públicos. Sin embargo, en este momento se mantienen los aspectos más burocráticos de la Administración mientras que se privatiza la gestión como por ejemplo en los hospitales. Si se elimina el espacio de creatividad y respeto a la vocación de estos profesionales va a haber efectos negativos que pronto se van a notar en cuestiones esenciales como la sanidad, la educación y desde luego en la ciencia. Y la credibilidad internacional de nuestro país, por muchos esfuerzos de *marketing* que se hagan, se va a encontrar por los suelos.

En el actual debate sobre quienes asumen el papel de gobernantes parecería que los que controlan actualmente la política española tienen aversión a lo científico y lo académico. En la situación de excepcionalidad que se está viviendo proliferan los análisis más o menos profundos o demagógicos sobre quien controla las decisiones políticas de los países. **De algunos de estos análisis se podría sacar la conclusión de que los actuales gobernantes priman los aspectos corporativos de la burocracia sobre los aspectos creativos que representan la ciencia y la educación. O también que se aprovecha para sacar partido económico de actividades como la sanidad frente a las necesidades sociales o para promocionar algunas ideologías concretas en la educación.** Seguramente son todas estas visiones excesivamente simplistas. **En cualquier caso parece obvio que investigación, educación y cultura no son prioridades de los actuales gobernantes españoles.** Y sería interesante conocer si hay alternativas concretas en alguna fuerza de la oposición.

Quizá podríamos proponer un partido de científicos para tratar de ganar el poder, aunque es previsible que no superar en votos al Partido Pirata. Ni los científicos harían campañas electorales eficaces ni tampoco hay ninguna evidencia de que los científicos fueran buenos gobernantes. **Pero no parece razonable en un país que debería salir de la crisis con un modelo económico y social distinto, que se marginen o se arruinen aquellas actividades que están en la base de nuestras opciones de futuro.** Sobre todo cuando son aquellas actividades que los ciudadanos más respetan. Quizá deberíamos encontrar vías para transmitir de forma clara a los ciudadanos cuáles son aquellas opciones políticas que respetan a aquellos colectivos que los ciudadanos respetan y cuáles las están hundiendo para que estos tomen sus decisiones con pleno conocimiento de causa. **Y si la ciencia no acaba controlando el poder podría exigirse que al menos este muestre algún nivel de respeto hacia ella.**

Pere Puigdomènech es profesor de Investigación del CSIC.

Aprender a decir no

Pensar y actuar por uno mismo es el núcleo de la cultura europea y eso exige enfrentarse al poder

Por Ignacio Sotelo

Hemos sabido de la existencia de un funcionario, porque ha cumplido con su deber. Desde hace medio año Juan Antonio Gallo Sallent **dirige el órgano administrativo de recursos contractuales de Cataluña**, entidad autónoma encargada de supervisar los contratos en el sector público, que la Generalitat ha creado en aplicación de una directiva comunitaria. Pues bien, este funcionario **ha revocado** la decisión que había tomado el Gobierno a gran velocidad (se dice que para poder pagar las nóminas de diciembre) de adjudicar Aguas Ter Llobregat (ATLL) al grupo Acciona, **dando la razón a otra empresa que también había pujado**.

Lo más normal, ya que la agencia se creó con este fin, se ha convertido, sin embargo, en un notición, porque nada sorprende tanto como que un funcionario se atreva a llevar la contraria a los de arriba. El asunto tiene su envidia, porque en nuestro país ha fallado a menudo la inspección, ya sea bancaria, fiscal, o de cualquier otro tipo, con las consecuencias catastróficas conocidas, y en este caso parece que no.

La corrupción se levanta sobre la falta de control, y si además se añade la seguridad de que nadie va a pedir cuentas, miel sobre hojuelas. Sea cual fuere el comportamiento del funcionario —por ignorancia, incompetencia, o por afán de enriquecerse— es altamente improbable que se le exija responsabilidades. Lo que sí suele tener consecuencias más desagradables es no hacer lo que se sabe que el jefe espera de uno.

No estoy al tanto de los intereses en juego, ni del trasfondo del asunto, y no descarto que el equivocado pueda ser el funcionario, o que lleve razón, aunque luego los tribunales se la quiten. Sean cuales fueren los motivos, su comportamiento ha levantado sorpresa y admiración. Conscientes de los riesgos personales que corre el que ose decir no en solitario, no es frecuente tal atrevimiento, tanto más raro, cuánta más alta sea la posición que se ocupe. Los que han alcanzado la cúspide del poder parecen ya meros autómatas, con ideas y conductas programadas de antemano. Y ello, porque, cuánto menos se disienta en el clan al que se pertenece, más rápido se asciende.

Vale la pena reflexionar sobre los riesgos de oponerse, no ya al poder político, sino más arduo aún, a la presión social de nuestro entorno, rompiendo con el entramado ideológico dominante, incluido el más recio que configuran los prejuicios. Nada parece más encomiable que atreverse a pensar por uno mismo, dispuesto a quedarse solo, si fuere preciso, al obrar en consecuencia. Al fin y al cabo, pensar por uno mismo es el precepto constitutivo de la ilustración que se complementa con el coraje y audacia que se necesitan para comportarse de manera consecuente. Pensar y actuar por uno mismo constituyen el núcleo central de la cultura europea, que en un largo proceso de secularización nos ha librado de obedecer de manera acrítica a cualquier autoridad por el simple hecho de serlo.

Eliminado el monopolio de la verdad, la Europa moderna se hace en la búsqueda de lo razonable, no simplemente de lo racional, consciente de que todo avance en la ciencia, la economía, la política —en general, en el saber y en el comportamiento— proviene de poner en tela de juicio las evidencias de turno. No hará falta insistir en que la pervivencia de la cultura europea depende, en último término, de la capacidad de decir no que adquiera y sepa mantener una porción significativa de personas.

Así como se enseña a obedecer, también hay que hacerlo a llevar la contraria. Decir no por propio convencimiento no es una virtud con la que nacemos, sino, después de millones de años en que no se diferenciaba la opinión del individuo de la del grupo, un logro tardío de nuestra cultura.

Sigue.../...

Inculcar en los niños que no se replica a los padres, a los maestros, a las personas mayores, es lo propio de la sociedad estamental premoderna; en nuestra cultura moderna europea, al contrario, no solo hay que responder a todas las preguntas sin frenar la curiosidad infantil, sino formarlos de tal forma que la capacidad de disentir crezca con los años. **Educación consiste en formar personas preguntonas y respondonas, libres del temor autoritario de que para no tener líos, más vale callar.**

Nos decimos europeos, pero en educación, en otros campos sí, todavía no nos hemos instalado en la modernidad. Nuestro sistema educativo sigue basado en que los educandos acepten todo lo que diga el maestro, sin derecho a replicar, y por lo tanto, sin el menor interés en preguntar. Siempre me ha admirado la paciencia con que en la escuela, los institutos y las universidades los alumnos aguantan el monólogo del profesor, insulso o brillante, qué más da. Aprender a obedecer sin preguntar configura el meollo de una sociedad estamental en la que domina la nobleza latifundista, al amparo ideológico de una Iglesia también latifundista.

La crisis ha puesto en evidencia lo que muchos llevamos repitiendo durante decenios, **que mientras no cambie de raíz la educación**, pasando de la obediencia pasiva que obliga a aprender lo que nos echen, a una que se base en preguntar por aquello que de verdad importe al alumno, **nuestro desarrollo cultural, social y económico seguirá levantado sobre pies de barro**. A estas alturas no vale ya sacarse de la manga pretextos para ocultar el hecho de que nuestro sistema educativo es el principal responsable de la cifra inaudita de paro juvenil.

Junto con la democracia, la España nacional destruyó en 1936 la Institución Libre de Enseñanza, la única asociación que desde el liberalismo decimonónico había surgido para modernizar la educación, con el objetivo de integrarnos culturalmente en Europa. En 1982 volvimos a perder, tal vez la última oportunidad, de un cambio educativo en dirección a Europa.

Los socialistas llegaron al poder reclamando el cambio, y en buena parte contribuyeron a consolidar el reformismo posfranquista que había inspirado la Transición. Ciertamente cumplieron en tres campos fundamentales, controlar al ejército, poniendo punto final al golpismo; ingresar en la Comunidad Europea e iniciar un modesto Estado social. Pero todo ello, dentro de la cultura tradicional heredada, interesados más en mantener controlados a los movimientos sociales, que en educar ciudadanos capaces de decir no. Se siguió apoyando una sedicente cultura popular, entendida no en un sentido machadiano, sino verbenero y trivial, sin que se diferenciase un ápice de la propuesta por la derecha. Y más grave, consolidando el modelo educativo de la Transición que privilegiaba la educación tradicional en manos de la Iglesia.

Con la crisis los españoles empezamos a ser conscientes de que lo que nos separa de Europa es, en primer lugar, **un desfase cultural**. Claro que por doquier quedan restos de la sociedad premoderna tradicional, pero en España son demasiados y sumamente importantes. **En la educación es donde este desfase es más visible, tanto más escandaloso según se ascienda de la enseñanza primaria a la universitaria.**

Muchos son los que desde hace tiempo han caído en la cuenta de que **el problema central de España es la educación, pero también en que es el más difícil de abordar por las muchas implicaciones, familiares, sociales, ideológicas y políticas que conlleva**. Me temo que seguiremos en la noria legislativa, dictando normas y normas siempre provisionales, sin enfrentarnos al verdadero problema de por fin educar a decir no.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.

¿Una segunda transición?

La crisis española, caracterizada por una elevada corrupción, economía sumergida, ineficiencia del sector público y desequilibrios territoriales, debe combatirse con cambios legislativos y constitucionales pactados

Por Guillermo de la Dehesa

Estos son algunos de los serios problemas institucionales, económicos y políticos que están aflorando en España. **Primero**, el sector público es hoy demasiado grande para poder ser financiado con los ingresos fiscales procedentes de sus ciudadanos y empresas. Hay que luchar contra la evasión fiscal, al estar el IRPF excesivamente concentrado en los asalariados, pensionistas y autónomos y al ser la evasión del IVA todavía muy elevada.

En 2008, antes de la recesión, 18,65 millones de personas declararon por IRPF, pero solo 8.590 (el 0,046%) declararon ingresos superiores a 600.000 euros; 87.300 (el 0,47%) entre 150.000 y 600.000 euros y 677.000 (el 3,63%) entre 60.000 y 150.000 euros. Es decir, el 95,85% declaró rentas inferiores a 60.000 euros y solo el 4,15% declaró rentas superiores a 60.000 euros. En 2010, los declarantes de más de 600.000 euros cayeron a 5.189 y los de entre 150.000 y 600.000 euros a 67.744.

En 2012, la Comisión Europea ha estimado que la economía sumergida en España alcanzaba el 19,2% del PIB y otras estimaciones llegan al 25% del PIB. Esta contiene actividades productivas que evaden impuestos directos e indirectos, Seguridad Social, salarios mínimos, etcétera, contribuyendo a que nuestros ingresos por IVA sean el 5,4% del PIB frente al 7% de media de la UE.

A la sumergida hay que añadirle la ilícita, compuesta por actividades delictivas (terrorismo, contrabando de mujeres, niños, especies, órganos, drogas y armas, blanqueo de dinero, prostitución, consumo de drogas) financiadas con billetes en euros y dólares de alta denominación, cuyos propietarios no pueden ser detectados por ser al portador. **Lamentablemente, en 2007, circulaban en España el 36% de todos los billetes de 500 y 200 euros de la Eurozona, cuando nuestro peso porcentual de su PIB total era del 11,9%.**

Segundo, a esta corrupción privada hay que añadir la política o pública, que afecta a aquellos políticos, gobernantes y administradores públicos que abusan de su poder vendiendo bienes públicos por debajo de su valor o dando concesiones administrativas por encima de su valor, para obtener una ganancia privada o partidista.

El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (2012) clasifica a España en el puesto 30 detrás de Chipre y de Botsuana y por delante de Portugal, cuando la gran mayoría de los países de la Eurozona están entre los 22 primeros, salvo Italia (72).

Corrupción privada y pública atañen a la inspección fiscal, Policía, Guardia Civil y también a la justicia, que siendo mayoritariamente eficiente, es excesivamente lenta, haciendo que muchos delitos prescriban antes de llegar a la Audiencia o al Supremo, incentivando a muchos delincuentes extranjeros a residir en España.

Tercero, el sector público es grande y menos eficiente que en otros países europeos al solaparse en cuatro niveles distintos de Administraciones públicas y necesita cuanto antes una profunda reorganización de sus niveles y competencias.

En 2010, el 40% de nuestros 47 millones de habitantes residía en 33 municipios de más de 100.000 habitantes, ocupando solo el 1% del territorio nacional. El 52% vivía en 83 municipios de más de 50.000 habitantes y el 68% en 252 municipios de más de 20.000 habitantes, pero existen 8.114 ayuntamientos. Siendo 168 ayuntamientos los que hacen frente a la mayoría de las demandas económicas y sociales de los ciudadanos, son las comunidades autónomas las que concentran el mayor poder de gasto, y la Administración central quien concentra el mayor poder de ingreso.

También en 2010, el mayor gasto del Estado lo hacían las autonomías (35% del total y 16% del PIB), seguidas de la Seguridad Social (32% del total y 14% del PIB), de la Administración central (20% del total y 9% del PIB) y de los ayuntamientos (13% del total y 6% del PIB). El mayor ingreso lo recaudaba la Administración central (37% del total y 13% del PIB), seguida de la Seguridad Social (33% del total y 12% del PIB), las autonomías (19% del total y 7% del PIB) y los ayuntamientos (11% del total y 4% del PIB).

Esta asignación territorial de ingresos y gastos debe modificarse para que los servicios de las Administraciones públicas estén más cerca de las demandas de los ciudadanos y para que cada Administración, especialmente las autonómicas, intente mejorar sus propios ingresos fiscales recaudándolos de sus propios ciudadanos, en lugar de vivir solamente de las transferencias de la Administración central, sin recaudar incluso impuestos cedidos. **Son los impuestos propios los que justifican una representación política y no al revés.**

El número de empresas públicas, especialmente autonómicas y municipales, es desproporcionado y mayoritariamente en pérdidas, siendo algunas más un sistema de generación de nóminas y dietas, de colocación de políticos y de captura de rentas que un medio eficaz de enfrentar necesidades económicas. **Han proliferado las televisiones autonómicas, financieramente insostenibles, perdiendo 1.600 millones en 2011.**

Cuarto, en los partidos políticos ha comenzado a primar el interés partidista sobre el general. **No han invertido recursos suficientes para mejorar la excelencia en aquellos factores de producción intangibles (educación, formación, investigación, desarrollo, innovación y tecnología)** que generan ya la mayoría del crecimiento de las economías avanzadas. Muchos Gobiernos autónomos y locales han primado la inversión en bienes tangibles, como suelo, construcción y vivienda, porque, entre otras razones, podían llegar a generar una apropiación de rentas al ser contratadas o conceder sus permisos.

Durante más de dos siglos, las cajas de ahorro han sido fundamentales para financiar el desarrollo local, provincial y regional español, mientras sus obras sociales aportaban servicios públicos necesarios. La Ley de Órganos Rectores de las Cajas de 1985 intentó “democratizar” sus órganos de gobierno, obligando a que en sus asambleas estuviesen presentes representantes de corporaciones municipales y provinciales, impositores, empleados y la corporación fundadora. **Finalmente, la mayoría de miembros de sus asambleas, consejos y obras sociales han terminado siendo políticos y representantes sindicales.**

El resultado final es que de 46 cajas existentes en 2009, hoy solo quedan 11 bancos de cajas, 3 de ellos nacionalizados agrupando 12 cajas, y 2 cajas pequeñas.

Excluyendo aquellas Cajas cuyos directores rechazaron determinados deseos de sus presidentes y consejos (logrando mantenerse en sus puestos) muchas han terminado quebrando, siendo fusionadas o compradas. **Durante la burbuja, las cajas aumentaron un 25% sus sucursales y un 27% su personal, mientras los bancos los reducían en un 5%.**

Quinto, en los interlocutores sociales, patronales y sindicatos, parte fundamental de la sociedad civil, también prima su interés corporativo. Han sido, en buena parte, responsables de nuestros desmesurados niveles de paro, al no ponerse de acuerdo, oponerse o impedir varias reformas laborales. España es líder de la UE con 6.000 convenios colectivos, mayoritariamente provinciales que, hasta la reciente reforma laboral, han provocado cierres masivos de pymes en cada recesión.

En lugar de organizarse a nivel sectorial y nacional, como en la mayoría de la UE, lo están también a nivel regional y provincial e incluso local, creando organizaciones excesivamente grandes y costosas para su actividad real. Además, cada uno recibe cientos de millones de euros anuales de subvenciones procedentes de la cuota de Formación Profesional y del Fondo Social Europeo, para facilitar la formación profesional continua.

A pesar de recibir elevadas subvenciones públicas, los sindicatos no publican todavía cuentas auditadas por auditores independientes y la CEOE por vez primera ha publicado este año las de 2011. En 2001, una inspección del FORCEM por el Fondo Social Europeo mostró que una parte de sus subvenciones no había sido invertida en formación profesional continua, exigiendo su devolución.

Para cambiar cuanto antes el rumbo de estas graves y nocivas tendencias, la débil sociedad civil española debe reorganizarse y los dos grandes partidos políticos deben promover, conjuntamente, cambios legislativos y constitucionales.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).